



Detrás de estas cifras frías, se esconde el drama de cientos de miles de familias en situación de precariedad. Y por si la fuerza destructora de la recesión no fuese suficiente, el gobierno ha paralizado prácticamente todos los programas sociales de alivio directo de la pobreza.

MIGUEL IGNACIO PURROY

Quienes le otorgamos un voto de confianza inicial al nuevo equipo económico, nos estamos empezando a sentir incómodos al tratar de defender su gestión. Quizás nuestra reacción esperanzada se debió a que estábamos preparados para lo peor y el gobierno nos sorprendió con unas primeras medidas bastante sensatas. Se le notaba al equipo buenas intenciones y un marcado sentido de responsabilidad fiscal. El problema ahora es que, después de un preámbulo auspicioso, el telón de esa obra titulada "La recuperación económica" no termina de subir, el público empieza a moverse incómodo en sus sillas y en cualquier momento arranca el abucheo.

Nos acercarnos a la mitad del año y el gobierno no termina de precisar su programa de acción. Pero, mucho más grave aún que la falta del programa, es la aparente poca preocupación del alto gobierno por el problema recesivo. No sabemos si les falta información o tienen guardada bajo la manga alguna estrategia inteligente. O también puede ser que piensen que no merece la pena ocuparse mucho del problema económico, hasta tanto no se haya abordado el problema político. Esta parece ser, al menos, la visión del Jefe de Estado, pero no sabemos si es totalmente compartida por sus ministros, que están siendo crecientemente confrontados con el lamento de sus respectivos sectores.

El Presidente ha repetido insistentemente que estamos viviendo la secuela de cuarenta años de malos manejos y que nadie puede pedirle que arregle la crisis en pocos meses. Irrefutable el argumento, pero resulta que el deterioro de la economía es tan serio y tan acelerado, que puede contaminar y hasta bloquear su proyecto político constituyente. Nadie está pidiendo soluciones estructurales inmediatas, simplemente se le pide al gobierno que ponga el barco a flote mientras se decide qué rumbo tomar. No vaya a ser que no tengamos barco el día que sepamos hacia dónde queremos navegar.

Una recesión sin precedentes

La recesión se viene manifestando desde el tercer trimestre de 1998 y se ha agravado de forma alarmante durante los primeros cinco meses del año en curso. No tenemos cifras a mayo, pero un indicador muy preocupante es el incremento

Para reactivar la economía

en 4% de la tasa de desempleo entre enero y marzo. Estamos hablando de cerca de 400 mil personas desempleadas en apenas un trimestre. Este es un salto que no tiene antecedentes en la historia económica de Venezuela. La actividad económica general viene cayendo en un 8% promedio durante los pasados dos trimestres. Un indicador que suele reflejar bastante fielmente la evolución del PIB es el «índice de producción de la industria manufacturera privada». Pues bien, este índice ha descendido casi 22% entre marzo 98 y marzo 99. Para el mismo período, el «índice de ventas al detal» ha caído en 38,6%. Ambos indicadores reflejan un descenso sin precedentes de la actividad económica. Si tomamos en cuenta que el sector petrolero tendrá este año una caída del 12% real, ya puede imaginarse el lector que la economía venezolana puede terminar el año con una recesión que puede oscilar entre un 6 y un 10% del PIB, dependiendo de cuán pronta sea la reacción del gobierno.

Detrás de estas cifras frías, se esconde el drama de cientos de miles de familias en situación de precariedad. Y por si la fuerza destructora de la recesión no fuese suficiente, el gobierno ha paralizado prácticamente todos los programas sociales de alivio directo de la pobreza. Las gobernaciones no están recibiendo los recursos para continuar con sus programas sociales. Hay desesperación en quienes vienen manejando esos programas, al no recibir explicación del corte del flujo de recursos. Sea como fuere, son los pobres quienes están sufriendo las consecuencias de esta dejadez.

Cuando se desatan procesos recesivos de tanta fuerza, el tiempo es una variable importante. Es usual observar cómo la espiral del deterioro se va acelerando progresivamente. Cuanto más tarde se actúe, más drásticas tendrán que ser las medidas. En este hecho radica la angustia de quienes venimos insistiendo en una pronta actuación del gobierno. No quisiera pensar que al presidente Chávez le guste aplicar la misma receta de Caldera: no hacer nada, esperar que el deterioro sea lo suficientemente insoportable como para que todo el mundo clame por su intervención, esté dispuesto a dar como bueno cualquier plan de acción que medio nos saque del marasmo y le agradezca habernos salvado de la hecatombe final.

Diagnosticar bien, para no fallar

¿Qué se puede hacer? Cualquier programa de acción debe tener la doble vertiente de acciones inmediatas, de muy corto plazo, y medidas estructurales que hagan sostenible la recuperación económica. La combinación de medidas coyunturales y estructurales es indispensable por dos razones. Primero, porque una actuación expansiva del gasto público, por ejemplo, sin el acompañamiento de reformas fiscales desembocaría en un grave desequilibrio macroeconómico y en mayor inflación. Y segundo, porque hoy más que nunca la percepción de la comunidad financiera e inversionista es vital para que retorne la confianza y se revitalice el proceso de inversión privada. Sin la inversión privada, ningún programa de reactivación es sostenible. Pero si los inversionistas perciben que el plan de reactivación no está articulado con reformas estructurales que lo hagan sostenible en el tiempo, continuarán manteniendo una actitud de «esperar y ver». Les guste o no a los gobiernos, hoy en día necesitan contar con el apoyo de los mercados financieros, tanto como con el respaldo de los electores. Así es este mundo tiránicamente «globalizado».

Para poder afinar las medidas correctas, es necesario que acerremos primero con el diagnóstico de cómo hemos arribado a semejante deterioro. Entre los elementos que más han contribuido a conformar la actual situación tenemos que mencionar la enorme volatilidad de nuestra economía. Los precios petroleros han oscilado \pm 40% durante los últimos quince años. Sin embargo, el verdadero problema no ha sido la volatilidad en sí misma, sino la ausencia de mecanismos institucionales que permitan absorber o neutralizar estas oscilaciones. Ello ha obligado a las autoridades a aplicar políticas económicas erráticas, a nivel fiscal, monetario y cambiario. Otra distorsión institucional ha sido la existencia de un Estado hipertrofiado y de un gasto público rígido e ineficiente.

La dramática caída de la inversión, desde hace 20 años, es prueba de lo infructuoso que resulta pretender lograr equilibrios coyunturales sobre la base de un profundo desequilibrio estructural. Por un lado, la erraticidad de las políticas asusta a los inversionistas que necesitan reglas de juego esta-

bles y predecibles. Y por otro lado, los vaivenes de las tasas de interés reales hacen que, cuando éstas son negativas, el ahorro nacional se destruya y que, cuando ellas son positivas, las empresas entren en crisis y el empleo se destruya. O destruimos el ahorro, o destruimos el empleo. En este péndulo maldito llevamos ya dos décadas.

Cualquier programa de estabilización o de recuperación, por consiguiente, debe sentar las bases institucionales para lidiar con la volatilidad macroeconómica. Principalmente, hay que reformar a fondo el régimen fiscal para que el gasto público sea más estable y, adicionalmente, se rijan por reglas de desempeño preestablecidas. Estas reglas deben estar orientadas al cumplimiento de objetivos de equilibrio primario, de eficiencia y de transparencia.

¿Qué hacer en lo inmediato?

Nunca será suficiente la advertencia de la necesidad de acompañar las medidas de corto plazo con reformas estructurales. Ahora bien, una vez establecido este axioma, no cabe duda que en lo inmediato el gobierno debe volcarse en acciones para reanimar la actividad económica y generar empleo. Un componente central de esas acciones tendrá que ser el gasto público. Hay que utilizar parte de los ingresos petroleros adicionales, es decir, por encima del precio presupuestado de 9 dólares, para elevar el gasto social directo, así como el gasto de inversión en infraestructura. El año pasado el gasto social directo fue apenas de 0,7% del PIB y la inversión pública no pasó de 0,4%. No sería nada descabellado plantearse duplicar ambos rubros de gasto (llevarlos a poco más de 2% del PIB), a través de programas especiales que estén explícitamente orientados hacia la generación de puestos de trabajo.

A los ortodoxos les asusta hablar de «planes de empleo» por los ingratos recuerdos del pasado, pero algo hay que hacer en esa dirección. Tampoco les gusta la reforma del Fondo de Estabilización Macroeconómica, porque el gobierno lo quiere transformar en un fondo de gasto más que de ahorro. Aun cuando pienso que el FEM debería ser dejado como está (de todas formas, no iba a recibir recursos), 'no tiene sentido represar los recursos adicionales o destinarlos únicamente a reducir endeudamiento.

Este tipo de incrementos de gasto no tiene por qué ser inflacionario. Por un lado, existe suficiente capacidad ociosa en el aparato productivo para atender el aumento de la demanda. Y por otro lado, este aumento del gasto generador de empleo puede ir acompañado de reestructuraciones de gastos en otras áreas menos eficientes. Muy importante también, es diseñar una estrategia de financiamiento que permita no sólo financiar el déficit de 1999, sino que también haga manejable el servicio de la deuda durante los próximos años. La capacidad de endeudamiento de Venezuela sigue siendo holgada.

Un mecanismo expedito para aumentar las inversiones sin comprometer los recursos del fisco, es la política de concesiones. Ahí existe un enorme campo sin explotar. Se podrían reactivar obras paralizadas como la autopista alterna Caracas-Litoral, la autopista de Oriente, el muelle de cruceros de Puerto La Cruz, etc.. Hay también un sinnúmero de proyectos ya aprobados por entes multilaterales y que sólo necesitan el cumplimiento de ciertas formalidades por parte del gobierno venezolano para que los recursos empiecen a ser desembolsados.

Pudieran estudiarse diversos incentivos para aumentar la generación de empleos. En algunos casos, aunque desgraciadamente no muchos, reducciones de la carga impositiva a empresas que creen empleos pudieran ser de ayuda. Más efectiva y general podría ser la reducción del conjunto de "Impuestos de nómina" (IVSS, LPH, INCE, etc.), que han ido encareciendo la contratación de mano de obra hasta representar casi un 45% del costo salarial directo. Pudiera pensarse, también, en modalidades de contratación y de despido más flexibles para empleos «temporales». En general, todo lo que abarate la contratación de personal ayuda a mitigar el desempleo. Aquí los sindicatos deben negociar un equilibrio entre proteger el ingreso de los ya empleados o facilitar nuevos puestos de trabajo.

Hay, también, márgenes de acción en nuestras relaciones comerciales con el exterior para ampliar la participación de los productores nacionales en el mercado interno. Los acuerdos comerciales internacionales contemplan la posibilidad de invocar «cláusulas de salvaguarda» cuando la producción nacional esté severamente afectada. Debemos manejar con más agilidad y frecuencia los mecanismos de protección anti «dumping». Estas son herramientas de uso delicado, pero hay que explotarlas al máximo.

En el área social, aparte de reanudar inmediatamente los programas de alivio directo de la pobreza, es necesario continuar con el proceso de reforma del sistema de seguridad social. El área previsional requiere ser capitalizada y una forma de lograrlo en un plazo más corto, sería acelerando el proceso de privatizaciones y destinando esos recursos al sistema de seguridad social. Lamentablemente son malas las noticias que nos llegan de ese frente.

Podríamos seguir enumerando más medidas para lograr la recuperación de la actividad económica, pero este breve comentario no tiene ese propósito. Ahora bien, no se puede dejar de mencionar un aspecto crucial: hay que saber comunicarle a la comunidad financiera los buenos propósitos. Sin una adecuada estrategia comunicacional se hará muy cuesta arriba superar el principal escollo de la reactivación, que son las expectativas negativas de los inversionistas sobre el futuro económico. Para ello, hacen falta dos cosas: un buen programa de acción y un comunicador que sepa explicarlo. Lamentablemente no se vislumbra en el equipo de gobierno quién pudiera asumir ese papel, a no ser que lo haga el mismo Presidente de la República. Y respecto al programa, no parece que sin una aprobación formal por parte del FMI se logre quebrar las expectativas.

MIGUEL IGNACIO PURROY

Economista